

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LO PÚBLICO.

EN TU VIDA, LO PÚBLICO ES ESENCIAL.

- **En defensa de los Servicios Públicos en la Comunidad de Madrid.**
- **No queremos una sociedad en la que se imponga la ley de la selva.**

Las políticas públicas y los servicios públicos miden el grado de civilización y de democracia de una sociedad y representan los principales ámbitos que determinan el verdadero desarrollo del llamado Estado de Bienestar. Un Estado de Bienestar que queremos reivindicar, porque ha resuelto los problemas sociales, políticos y económicos mucho mejor que cualquier otra alternativa.

Para los trabajadores y trabajadoras, los servicios públicos son esenciales a lo largo de toda nuestra vida. Décadas de reivindicaciones, luchas y conquistas de los trabajadores y trabajadoras, cristalizaron en los años ochenta en la red de servicios públicos que define nuestro modelo social, coincidiendo con la consolidación del sistema democrático. Pero la construcción de una sociedad del bienestar es un proceso permanente, máxime cuando todavía hoy falta un largo camino por recorrer para alcanzar los niveles de las regiones más avanzadas y prósperas de la Unión Europea.

Un modelo social que adquiere nuevos compromisos y al que le asaltan nuevos riesgos. Nuevos compromisos con el modelo productivo de las sociedades desarrolladas en la economía globalizada del siglo XXI. Y es que su competencia exige una sociedad cohesionada, unas instituciones democráticas consolidadas y una intervención de los poderes públicos con políticas públicas dirigidas a fortalecer la industria y la innovación, la calidad del empleo y la extensión y mejora de los servicios públicos. Nuevos riesgos que provienen de viejas ideologías conservadoras y retrógradas que nos quieren hacer retroceder a la ley de la selva capitalista del inicio de la revolución industrial. Una ofensiva neoconservadora y ultraliberal que se inició con Reagan en USA y Thatcher en el Reino Unido en los 80 y ha llegado a su paroxismo con las políticas actuales de Bush. Entre sus consecuencias está el ataque a los servicios públicos en el ámbito europeo que está suponiendo la Directiva Bolkenstein, contestada y denunciada por la

Confederación Europea de Sindicatos, CES. Quienes se adhieren a este manifiesto apoyan y se comprometen con la campaña “Por unos servicios públicos de calidad, accesibles a todos”, que está desarrollando la CES en toda la Unión Europea.

En la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Aguirre se ha convertido en un acólito aventajado de los postulados neoconservadores. En la legislatura que ahora termina, no sólo no se avanza en la mejora de la vida de la ciudadanía, sino que se retrocede, por la vía de una creciente y deliberada desatención de todas las políticas relacionadas con los Servicios Públicos, y de manera muy especial con la Educación, la Sanidad, los Servicios Sociales, los Transportes y las Comunicaciones, favoreciendo una gestión privada de los mismos, únicamente atenta a privilegiar los intereses de grupos afines al Gobierno de la Comunidad de Madrid, bien sean empresariales, ideológicos o confesionales.

De los servicios públicos depende en buena medida la ciudadanía social, la garantía de una educación de calidad, una sanidad adecuada que nos atienda con prontitud y con eficacia, los servicios sociales que nos cuiden en nuestra vejez y atiendan a las personas en situación de dependencia, un transporte público ágil, bien diseñado y confortable, unos medios de comunicación públicos, objetivos y que respeten la pluralidad democrática.

Los servicios públicos son tan importantes para los trabajadores y trabajadoras, para la inmensa mayoría de la sociedad, como nuestros salarios, porque constituyen el denominado salario social y garantizan nuestra calidad de vida.

Estos servicios públicos dependen hoy en su práctica totalidad de la Comunidad Autónoma, y hoy en Madrid están en grave retroceso.

El crecimiento económico que ha disfrutado la Comunidad de Madrid y el consiguiente aumento de la riqueza regional, no se ha aprovechado para corregir los déficit sociales y económicos, reducir la desigualdad y fortalecer la cohesión social. En un escenario económico en que los beneficios empresariales crecen por encima del 20% y las rentas salariales lo hacen un escaso 3%, el Gobierno Regional ha optado por debilitar los instrumentos de reparto y redistribución que tiene en sus manos, los impuestos y los servicios públicos. Rebajando los primeros a las rentas altas y ahogando presupuestariamente los segundos, está contribuyendo a una

mayor desigualdad y, a la postre, a la descohesión y al conflicto social. Con ello, está defraudando el papel constitucional que tiene encomendado.

La Comunidad de Madrid es la que menos invierte en materia de educación de toda España; además, en sus Presupuestos anuales la partida que más crece es la destinada a financiar la enseñanza privada concertada, sin que, por cierto, ello repercuta positivamente en las condiciones salariales de los trabajadores y trabajadoras de dicho sector.

Se producen paradojas insoportables. Mientras crece la preocupación social por el fracaso escolar, más de la cuarta parte de los jóvenes no obtiene ninguna titulación, diez puntos más que la media europea, y los problemas de convivencia escolar y brotes de violencia juvenil crecen, el Consejero se dedica a buscar suelos públicos para colegios privados, presionando a los gobiernos locales. Los resultados son 500.000 metros cuadrados para 45 nuevos centros privados, un centro público construido por cada tres privados y la ausencia de escuela pública en los nuevos barrios. El dinero público, el de todos, se destina a la enseñanza privada. Quizás el mejor ejemplo que define la actual política educativa sea la desatención de la demanda de más de 25.000 familias madrileñas, que se han quedado sin plaza en la escuela infantil pública.

El gasto sanitario de la Comunidad de Madrid es el penúltimo de toda España y el modelo sanitario del Gobierno de Aguirre se ha caracterizado por esta financiación claramente insuficiente, por la falta de transparencia en la gestión, y por una progresiva fragmentación y descapitalización del servicio público sanitario, a la vez que se fomenta el sector privado, traspasando recursos públicos, nuevamente de todos, a la sanidad privada. Haciendo de nuestra salud, una oportunidad de negocio, poniendo nuestra salud en manos de empresas privadas con intereses muy ajenos a los específicamente sanitarios de los ciudadanos madrileños.

Si en el momento actual, el 40% del Presupuesto se transfiere al sector privado, en el futuro, con los nuevos hospitales de Iniciativa de Financiación Privada y el impulso de privatización de servicios que supone el nuevo modelo de atención hospitalaria iniciado con la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, lo público será subsidiario. Y todo ello se hace en una Comunidad donde el modelo

de sanidad pública nunca ha estado en cuestión, gozando de una alta valoración por parte de la ciudadanía.

Las mentiras sobre las listas de espera han llevado incluso a que seamos la única Comunidad Autónoma expulsada de la contabilidad nacional de listas de espera. En la Comunidad de Madrid se empieza a contar la espera quirúrgica prácticamente cuando el paciente entra por la puerta del quirófano. Se han generado listas de espera en la atención primaria, en unos centros de salud, que, además, tienen un tiempo medio de consulta muy escaso para diagnósticos y estudios completos. La nueva zonificación sanitaria, realizada de espaldas a la sociedad, dejará a barrios y municipios de Madrid sin el número de camas necesario y con grandes desigualdades entre unas áreas y otras.

La sanidad privada puede pasar de ser regulada y controlada por el sector público, a controlar a éste. La salud de los madrileños y madrileñas se puede ver seriamente afectada, al anteponerse los criterios económicos a los clínicos.

En la Comunidad de Madrid hay una lista de espera de más de 20.000 personas para una plaza en una residencia de mayores, una demanda mayor que la oferta total existente en la región y que en sus dos terceras partes corresponde a personas dependientes. Las residencias se han convertido en un negocio privado que, en muchas ocasiones, no garantiza en absoluto la calidad en la atención que merecen nuestros mayores. La aplicación de la nueva Ley estatal de atención a la dependencia requiere de un impulso de las Comunidades Autónomas para la creación de nuevos servicios de atención a la dependencia, con un papel fundamental de la Administración Pública, que fomente los servicios profesionalizados de atención a la dependencia e incremente el gasto público.

También el transporte público ha sufrido un creciente deterioro en los últimos años. La ampliación de la red de Metro no ha venido acompañada de las inversiones necesarias en dotaciones para absorber el incremento de viajeros, ni en mantenimiento, haciendo del desplazamiento diario de miles y miles de trabajadores y trabajadoras una auténtica odisea. La planificación del transporte urbano que corresponde al Consorcio Regional del Transporte se ha sustituido por los intereses electorales y un clientelismo irresponsable. Y nuevamente la privatización, en este caso de las nuevas líneas con la consiguiente aparición de los sobrecostes para

las cuentas públicas, los riesgos para el servicio y el cuestionamiento del actual sistema tarifario regional.

Y todo ello mientras el Gobierno Regional culpabiliza a la ciudadanía de saturar las urgencias y los andenes, eludiendo su responsabilidad y sin querer ver las consecuencias de una política que no cree en los servicios públicos y que es absolutamente ineficaz en la gestión.

El grado de manipulación alcanzado por la dirección de la Televisión pública madrileña, Telemadrid, es tal que sus trabajadores mantienen una dura lucha en defensa de los derechos más básicos, incluidos la libertad de información. La televisión pública regional se ha convertido en un órgano de expresión de la Presidenta del Gobierno. Se ha ocupado una institución pública de comunicación, al igual que se ha procedido a desnaturalizar y convertir en propagandista de las políticas más radicales del Gobierno regional a la principal institución de participación social de la región, el Consejo Económico y Social.

Los servicios públicos son fundamentales para nuestra vida y su actual proceso de deterioro es una estrategia intencionada por parte de un gobierno como el de la Comunidad de Madrid que, en boca de su Presidenta y en sede parlamentaria, ha dejado claro en numerosas ocasiones su apuesta por lo privado frente a lo público.

Quienes firmamos este manifiesto hacemos un llamamiento al conjunto de la ciudadanía madrileña a manifestarse en defensa de lo público, porque para los trabajadores y trabajadoras, tan importante como nuestros salarios, son las condiciones de bienestar y cuidados que nos procuran los servicios públicos y porque somos plenamente conscientes de que el modelo de gestión privatizado, ni es mejor, ni es equitativo, ni prioriza a las personas frente al beneficio y la rentabilidad económica.

PORQUE EN TU VIDA LO PÚBLICO ES ESENCIAL, ACUDE A LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA POR UGT Y CCOO EL PROXIMO JUEVES 22 DE MARZO, A LAS 19 HORAS, EN LA PLAZA DE COLÓN DE MADRID.